

Santiago, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

Al escrito folio N° 199994-2022: estese a lo que se resolverá.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos sexto y séptimo, los que se eliminan.

Y teniendo en su lugar presente:

Primero: Que, en la especie, se ha ejercido la presente acción de cautela de derechos constitucionales, impugnando la omisión que se califica de ilegal y arbitraria, consistente en no cumplir con el pago de la asignación especial no imponible establecida en favor del personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública, en los términos que establece el artículo 40 del Decreto Ley N° 3.551 del 1980 del Ministerio de Hacienda, soslayando, de ese modo, la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2021 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en cuya virtud el Estado de Chile es condenado a pagar una serie de prestaciones en favor de un grupo determinado de profesores, vulnerando la garantía constitucional consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que al informar el recurrido sostuvo que aun cuando la presente acción constitucional no es la vía idónea para resolver conflictos como el de la especie, en tanto lo pedido no es sino el cumplimiento de una sentencia judicial, lo cierto es que es evidente que las peticiones del recurso no resultan ser viables, en vista de que, por un lado, el fallo dictado con ocasión del caso "Profesores de Chañaral y otras Municipalidades v/s Chile", resuelve la situación de 846 docentes chilenos entre quienes no se encuentran los recurrentes, mientras que, de otro lado, se trata de una situación fáctica distinta, puesto que para establecer la responsabilidad del Estado de Chile, la Corte IDH se basó en los procesos judiciales dirigidos en contra de los municipios de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, que culminaron



en trece sentencias firmes que reconocieron el derecho al pago de la asignación especial a los 846 docentes demandantes, cuestión que, en este caso no sucede.

Luego, refiere que igualmente existe un impedimento de pago, teniendo en cuenta que no existen antecedentes que permitan determinar que los recurrentes son acreedores de tal asignación, de tal suerte que, la ilegalidad y arbitrariedad que se reclama no resulta ser efectiva.

Por último, alude al efecto relativo de las sentencias judiciales, lo cual impide de todos modos acceder a lo solicitado.

Tercero: Que corresponde a esta Corte analizar si el acto que niega la indemnización alegada, vulnera el derecho contenido en el artículo 19 número 24 de la Constitución, de acuerdo a las alegaciones de la recurrente.

El presente caso plantea la figura jurídica de la interacción del Derecho Internacional Público con el derecho interno. En la especie, se trata de una sentencia dictada por una jurisdicción internacional, a la que el Estado de Chile se encuentra sometida, invocada por los recurrentes. En este punto es necesario señalar primero que los estados, de acuerdo con Derecho Internacional Público, se vinculan jurídicamente existiendo consentimiento de por medio. En el caso de la jurisdicción internacional, éste consentimiento existe, por regla general, mediante el reconocimiento y sometimiento del estado a la competencia del tribunal respectivo, el que podrá entonces conocer de casos por eventuales violaciones al derecho internacional que se encuentren bajo su jurisdicción. La sentencia que emane de ese procedimiento judicial internacional se configura como una fuente formal del Derecho Internacional, de acuerdo al artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que dispone: *"La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido"*. De acuerdo a la doctrina mayoritaria esta disposición es



aplicable a todo órgano que ejerza jurisdicción internacional. Siendo las sentencias del órgano jurisdiccional, para otros casos, elementos auxiliares para la interpretación de las normas internacionales, de acuerdo lo señala el artículo 38 del mismo tratado: "1. *La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: (...) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59*". Es por tanto, una sentencia internacional dictada contra un estado una fuente formal vinculante jurídicamente y genera la obligación de cumplimiento de lo resuelto, en ese caso concreto en que se pronuncia.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos, marco jurídico principal en el que se enmarca la alegación de los recurrente, señala en su artículo 62. 3. "*La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial*". Este artículo expresa, de manera diversa pero en el mismo sentido que los artículos 38 y 59 del señalado Estatuto de la Corte Corte Internacional de Justicia, que las sentencias emanadas de los casos sometidos a la Corte, resuelven el caso concreto específico sometido a la Corte, y los estados contra los que se dictan deben por consiguiente, al ser una sentencia, cumplirla atendido su carácter de fuente formal particular.

Cuarto: Ahora bien, las sentencias internacionales, a pesar de su efecto particular, como fuentes formales particulares para los estados involucrados en el juicio y para el caso concreto, tienen además 2 efectos extensivos adicionales. El primero y común para el ámbito del



Derecho Internacional general y de los Derechos Humanos, es de ser un elemento auxiliar para la interpretación y desarrollo del Derecho internacional. Esto recogido expresamente en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia ya mencionado, es aplicable también a la jurisdicción internacional de los derechos Humanos. Una sentencia es siempre un elemento que ilumina e ilustra la interpretación de una obligación convencional en un caso distinto al que se pronuncia. La acción jurisdiccional enriquece progresivamente la comprensión de los derechos. Esto es especialmente relevante en el caso de los derechos humanos, donde el mínimo común de contenido de la norma internacional, va llenándose de elementos que configuran la esencia de la norma. Esto con el debido respeto y deferencia a las naturales diferencias en torno a la comprensión de aristas discutibles de los derechos.

El segundo efecto extensivo y especial para el caso de la jurisdicción interamericana, es el de ser una fuente formal, si bien para el caso concreto, también lo es para los casos con igual sustrato factual y en contra del mismo estado. Si bien este efecto no está declarado expresamente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no puede ser de otra forma, toda vez que existiendo iguales elementos de hecho y mecanismos jurídicos internos desplegados, a otro ya conocido por la Corte Interamericana, y contra el mismo estado, éste no puede sino ver reflejada esa sentencia y una eventual futura dictación de otra, en los casos nuevos que se presenten. Esto significa que si un estado ha sido declarado culpable de violar la Convención debe, a casos iguales, aplicar el mismo criterio de la sentencia ya dictada.

Siendo así las cosas, en un caso donde otras personas se vean afectadas por la existencia de los mismos hechos y sean aplicables las mismas normas, el estado debe recoger la sentencia y aplicarla a esos nuevos eventos. Evitando de este modo una futura declaración de responsabilidad internacional.



Precisamente, en este sentido ha tenido la oportunidad de emitir opinión la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid con Chile, en el cual expuso que sus sentencias incrementan el corpus iuris interamericano al cual están ligados los estados del sistema, señalando "La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana".

Quinto: Sin perjuicio de lo señalado, en el presente caso, los recurrentes no se encuentran en la misma situación que aquellos que obtuvieron sentencia condenatoria en contra del Estado en el caso reclamado ante la Corte Interamericana. La diferencia, esencial, es la no existencia de una norma concreta, sentencia o procedimiento declaratorio, en el orden interno, que los señale inequívocamente, como acreedores de la llamada deuda histórica. No hay por tanto derecho indubitado que los sitúe en el mismo contexto de hecho y derecho indubitado, que los que obtuvieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los recurrentes no se encuentran en la misma situación, siendo entonces imposible definir si corresponde o no el reconocimiento de dicha



deuda, y por ende aplicación del criterio jurídico utilizado por la Corte Interamericana. Eso no obsta a que una vez determinado en el ámbito interno que son beneficiarios a la luz de esa figura y declarado así en un procedimiento apto para esos efectos, el Estado deba aplicar el mismo razonamiento de la Corte Interamericana en el caso referido por los recurrentes, actuando así de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, otorgando el derecho que de acuerdo a la norma y resultados del proceso interno, correspondan.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, **se confirma** la sentencia apelada de quince de febrero de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Abogada Integrante señora Benavides.

Rol N° 7.130-2022.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M. y Sra. Adelita Ravanales A., por los Abogados Integrantes Sr. Pedro Águila Y. y Sra. María Angélica Benavides C.





Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A. y los Abogados (as) Integrantes Maria Angelica Benavides C., Pedro Aguila Y. Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

